

¿Qué pasó en la Argentina? Algunas piezas de un rompecabezas para intentar entender¹

Pedro Pérez

Desde el 19 de diciembre de 2001 la Argentina se muestra como una sociedad en crisis, en un proceso complejo que parece difícilmente entendible. Surgen muchas preguntas, pero la cuestión más generalizada es: ¿cómo es eso posible? O bien, ¿por qué la Argentina? ¿Por qué el hambre en el país que fuera el “granero del mundo”? ¿Cómo es posible que una sociedad culta y educada de pronto descubra que ha sido engañada y robada?

Una respuesta muy común, que tiene la ventaja de ser muy simple, dice que es el resultado de la aplicación de un modelo, particularmente de un modelo económico impulsado desde las posiciones internacionales de poder. Esa respuesta, con un nivel de abstracción muy grande, tiene sin dudas un importante contenido de veracidad. Sin embargo, no es satisfactoria porque no permite conocer los procesos concretos que han generado la situación que se quiere explicar.

Para entender la crisis de diciembre de 2001 no es posible referirse exclusivamente a lo que pasó en la economía, como tampoco es posible tener en cuenta sólo los últimos años. Debe intentarse armar un rompecabezas introduciendo, por lo menos, algunas de las piezas que pueden dar una idea

¹ A mediados de enero pasado viajé a México para participar en un Diplomado realizado por el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, como había sido programado con varios meses de anticipación. Lo que sucedía en la Argentina motivó que fuera invitado a dar algunas conferencias para tratar de entender lo que pasaba. Ello dio lugar además a entrevistas de prensa. Esas presentaciones, con una pequeña sistematización, y agregando una breve bibliografía que las sustenta, es lo que configura estas notas. No son más que reflexiones informales, “desde adentro”, que intentan ofrecer una mirada sobre esos acontecimientos.

de conjunto, mostrando los dibujos más importantes. Para ello debemos mirar en un horizonte de no menos de veinticinco años. Los hechos que de alguna manera eclosionan a fines de 2001 comenzaron a mediados de los años setenta y tienen que ver con procesos antiguos. No es únicamente la economía argentina lo que está en juego sino la sociedad toda. De allí que introduciremos tres tipos de piezas para intentar montar el rompecabezas. Piezas que, de alguna manera, pueden ayudar a contestar las preguntas iniciales teniendo en cuenta tres dimensiones, o si se prefiere, tres crisis de la sociedad argentina: económica, política y sociocultural.

La economía: producir o endeudar

Es posible considerar, de manera simplificada, que el sistema productivo argentino ha dejado de sustentar a la población, que ha dejado de garantizar la reproducción de la sociedad. Tres indicadores dan una idea de esto: desempleo (en torno a 20% de la PEA), pobreza (50% de la población bajo la línea de pobreza) y emigración (doscientos mil argentinos en Miami, largas colas en los consulados europeos para obtener la doble nacionalidad o posibles visas de ingreso).

¿Por qué un país “tan rico”, con abundantes y variados recursos naturales y humanos está hoy en esa situación? El proceso comenzó a mediados de la década de 1970 (Basualdo, 2001) cuando la dictadura militar se propuso disciplinar a una sociedad que intentaba cambios sociales importantes. Para ello no solamente desconoció las instituciones políticas, “desapareció” a treinta mil personas, intentó “moralizar” y amedrentar a sus habitantes y realizó una fuerte presión ideológica, sino que inició la aplicación de una política económica que ha tenido continuidad luego de la recuperación institucional de 1983.² Simplificando, podemos decir que la política económica de la dictadura debilitó al sector industrial (volviendo de alguna manera a un perfil agro exportador) y consolidó el predominio del sector financiero. Abrió la economía, y comenzó el creciente endeudamiento externo.³

Posteriormente, esa política no se modificó en lo sustantivo, salvo el intento, no exitoso, en el primer gobierno de la recuperación institucional (pre-

² Es revelador tener en cuenta que en los últimos 25 años, bajo “dominio neoliberal directo o indirecto”, el ingreso real se estancó, mientras que en los 25 años anteriores había crecido casi un 67% (Nun, 2001).

³ En 1976, año del golpe militar, la deuda externa era de 9 700 millones de dólares; al final de la dictadura, en 1983, esa deuda había trepado a 45 100 millones. Esto es, creció 365% (Poniachik, 2001).

sidente Raúl Alfonsín, 1983-1989) de morigerar el impacto en los sectores de menores recursos. Los picos hiperinflacionarios, que terminaron con ese gobierno, echaron por tierra esa experiencia.

Desde los años noventa, y para salir de la hiperinflación, comenzó a aplicarse una política que en abril de 1991⁴ se concretó en la convertibilidad del peso, disponiendo su paridad uno a uno con el dólar, al tiempo que se aplicó una fuerte “reforma de Estado” que en lo fundamental supuso la desregulación de las actividades económicas y la privatización de las empresas públicas, así como de algunas funciones cumplidas por aparatos estatales (Azpiazu y Nochteff, 1994).

La convertibilidad trajo consigo la necesidad del ingreso de dólares para hacer crecer la moneda interna, ya que no era posible manejarla en forma independiente a la existencia de dólares. Con una economía que venía siendo desindustrializada, los dólares que ingresaban por exportaciones no eran suficientes y se incrementó el endeudamiento, así como el ingreso de inversiones financieras atraídas por las altas tasas que se pagaban. Por lo demás, la mezcla de apertura, desregulación y tipo de cambio fijo supuso la creciente pérdida de competitividad internacional de los productos y servicios argentinos, con lo que el ingreso de dólares por exportaciones disminuyó aún más y el endeudamiento fue cada vez mayor⁵ (Vitelli, 2002).

Las privatizaciones tuvieron algunos efectos fundamentales (Azpiazu, 1997). Por un lado la aplicación de criterios de eficiencia llevó a disminuir en forma considerable el empleo en las empresas públicas. Ello se realizó sin haber tomado ninguna medida orientada siquiera a morigerar el desempleo generado (Pírez, 1997), más allá de indemnizaciones individuales que, por lo general, fueron rápidamente gastadas en emprendimientos no sostenibles (taxis, kioscos, etc.). Ese incremento de la eficiencia no redundó necesariamente en un beneficio de los usuarios, ya que las regulaciones generaron condiciones institucionales para la obtención de ganancias extraordinarias para la mayoría de esas empresas (tarifas asociadas a la inflación de los Estados Unidos de América, cuando en la Argentina no había inflación o bien había deflación, seguro de cambio, etc.) (Abeles, 2000). No fue menor el impacto de la privatización de las jubilaciones y pensiones que dio lugar, además, a un fuerte desfinanciamiento del Estado.

⁴ En 1989 fue elegido presidente Carlos Menem, quien fue reelecto en 1995 por cuatro años, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994.

⁵ La deuda externa en 1989, cuando Menem asume el poder, era de 65 300 millones de dólares (lo que implicó un incremento en el gobierno anterior de 44.80%). En 1999, último año de la presidencia de Menem, la deuda llega a 146 219 millones de dólares, habiéndose incrementado en un 123.92% (Poniachik, 2001).

En los primeros años de la década de los noventa el producto creció en forma considerable,⁶ pero también lo hizo el desempleo⁷ y por ende empeoraron las condiciones de los sectores populares.⁸ A partir de mediados de esa década el crecimiento se detuvo y hacia el final la economía estaba en recesión.

El resultado fue una enorme concentración del ingreso,⁹ pérdida inédita del salario real,¹⁰ fuerte polarización social, con la reaparición de los males asociados a la pobreza, como la desnutrición, la deserción escolar, el crecimiento de la tuberculosis y de la mortalidad infantil, niños en la calle, desintegración familiar, delincuencia, etcétera, etcétera.

El sector público siguió endeudándose (adentro y afuera), destinando cada vez mayores recursos para pagar esa deuda creciente.¹¹ En un contexto, por un lado, de falta de competitividad e insuficiencia de ingreso de divisas por exportación (a lo que se agregó la salida de beneficios del capital financiero y de las empresas de servicios privatizadas) y, por el otro, de disminución de los ingresos fiscales por la detención del crecimiento desde 1995, y en los últimos cuatro años por su estancamiento, se reaccionó con políticas de ajuste que contribuyeron aún más a deprimir la economía, achicando el consumo interno y la producción y, consecuentemente, disminuyendo los ingresos fiscales. Ante eso se volvió a reaccionar con ajustes, iniciando un proceso permanente de deterioro. La necesidad del ingreso de dólares privilegió a las inversiones financieras y debilitó más aún la economía nacional.

Ese círculo vicioso de deuda, ajuste, deterioro económico, más deuda y ajuste parece haber sido un rasgo esencial de la política que se venía aplicando. Cuando en 2001, después de casi cuatro años de recesión, los capitales percibieron que esa circulación se detendría, comenzaron a irse. Luego que hubiera salido la parte más importante, el gobierno estableció, a comienzos de diciembre, el llamado "corralito" con el que se impidió a quienes tenían depósitos bancarios acceder a ellos, desapropiando a la población de sectores medios de sus activos financieros para evitar que los bancos quebraran.

⁶ Entre 1991 y 1996 las tasas de crecimiento anual fueron: 8.9, 8.7, 6.0, 7.4, -4.4 y 4.4 (Secretaría de Programación Económica, 1997).

⁷ La tasa de desocupación en los principales aglomerados urbanos, que en 1990 era de 6.3%, pasó en 1996 a 17.4% (INDEC, 1997).

⁸ La población bajo la línea de pobreza, que en 1991 era de 21.6% y en 1993 había bajado a 16.9%, llegó a 27.9% en 1996.

⁹ En el año 2000, mientras el 20% más pobre de la población recibía solamente 4.1% de los ingresos, el 20% más rico se apropiaba de 52.8% (INDEC, 2000).

¹⁰ Entre 1974 y 2001 el salario real perdió un 40%. En los cuatro primeros meses de 2002 perdió otro 30% (*Clarín*, 27 de mayo de 2002).

¹¹ A mediados de 2001 los intereses de la deuda eran superiores a los salarios públicos que se pagaban.

Aquí la población de clase media, la más perjudicada por estas últimas medidas, salió a la calle.

¿Qué pasa con la política?

Argentina vive una profunda crisis de representatividad que es, por una parte, crisis de los partidos y, por la otra, crisis de la política misma.

La modernización de la Argentina, a fines del siglo XIX, se realizó sobre la base de la incorporación económica de la población migrante de ultramar y sus descendientes y de su exclusión política (Botana, 1985). En 1916, con el gobierno del radicalismo (Hipólito Yrigoyen) ingresan los sectores medios en la política. Los trabajadores son incorporados luego de mediados de los años cuarenta. Pero en este caso tampoco como una afirmación de instituciones y prácticas republicanas, ni dentro de una construcción de ciudadanía a la manera de las democracias occidentales (Nun, 2001). Fue sobre todo el resultado de una política patrimonialista.

Las dictaduras militares, y particularmente la última (1976-1983) y más brutal, implicaron una suspensión de las instituciones republicanas y la sustitución de las instituciones sociales y políticas por el poder sustentado en la violencia física, que implica la posesión y uso de las armas. Violencia física que se prolonga en violencia ideológica para determinar, no solamente los comportamientos, sino aun los modos de pensar y entender la realidad (de allí la censura y la represión del pensamiento).

El siglo XX estuvo marcado por dos partidos políticos: Unión Cívica Radical (con base predominante de clases medias) y Partido Justicialista o Peronista (con base predominante de sectores obreros y populares). Ambos sin definición político-ideológica y con una cobertura policlasista. Desde la recuperación institucional posterior a la dictadura, en 1983, esos partidos se sucedieron en el gobierno y fueron, particularmente en la versión menemista del PJ (1989-1999) los responsables de la continuación de la política económica definida en la dictadura, tal como ya mencionamos.

La derecha económica y social argentina fue representada por medio del “partido militar”, las presiones y los golpes que dieron lugar a gobiernos dictatoriales. Luego de 1983 ese papel lo asumió un partido (Unión de Centro Democrático) que a principios de los noventa se alió con el PJ, dado el cambio ideológico del menemismo en el gobierno. Desde esa alianza la UCD dejó prácticamente de existir pues el PJ se hizo cargo de esos intereses económicos.

En los años noventa se formó otra fuerza política, enfrentada con el menemismo, que a partir de una separación del peronismo y su posterior

asociación con otros partidos (socialistas, democristianos, etc.) formó el Frente País Solidario (FREPASO) como alternativa política. El FREPASO apostó a acceder a posiciones gubernamentales antes de conformar una fuerza política amplia. Con una propuesta centrada en la lucha contra la corrupción que caracterizaba al gobierno menemista, el FREPASO constituyó junto con la UCR un frente (Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación) para garantizar la alternancia política en las elecciones de 1999. La Alianza asumió, más implícita que explícitamente, una propuesta de cambio: eliminar la corrupción, mejorar las condiciones distributivas para atender la creciente pobreza y modificar el modelo económico disminuyendo el peso del sector financiero.

Las expectativas, relativamente pequeñas, que se generaron, pronto se vieron frustradas: un hecho de corrupción nunca aclarado en el Senado, llevó a una fuerte diferencia entre el presidente (Fernando de la Rúa, UCR) y el vicepresidente (Carlos "Chacho" Álvarez, FREPASO) quien renunció al cargo. La política económica no se modificó, se incrementó el ajuste (los salarios de los empleados públicos federales se redujeron un 13%). Poco a poco el gobierno se inclinó cada vez más hacia la continuidad de la orientación económica que se consolidó en marzo de 2001 con el ingreso de Domingo Cavallo¹² como ministro de economía.

Las elecciones de diputados de octubre de 2001 mostraron la pérdida de legitimidad de los partidos: cerca de la mitad de los votos conformaron lo que se llamó el "voto bronca" (sumatoria de votos en blanco o anulados) (Vilas, 2001). Los partidos habían perdido credibilidad, en particular la Alianza. Paradójicamente el PJ fue el ganador relativo, lo que le dio, en la crisis de diciembre de 2001, la posibilidad de elegir parlamentariamente, de acuerdo con las normas de acefalía presidencial, a un presidente que sustituyera al renunciante De la Rúa. De allí que este gobierno, que luego de un intento fallido asume Eduardo Duhalde,¹³ no solamente no tenga representatividad sino tampoco legitimidad.

Pero no solamente perdieron credibilidad los partidos políticos, también, y fundamentalmente, ocurrió así con la actividad política como tal. Esto se debió a la subordinación de la representación por la acumulación de poder en el desarrollo de la actividad política (Pérez, 1991), la cual fue ejercida cada vez menos como identificación de problemas y su resolución y cada vez más como ocupación (logro, mantenimiento y expansión) de luga-

¹² Domingo Cavallo fue director del Banco Central durante la dictadura militar. Cuando el gobierno se hizo cargo de la deuda externa privada, fue el creador de la convertibilidad y el diseñador de toda la política económica del gobierno de Menem.

¹³ Quien fuera vicepresidente en el primer mandato de Menem, gobernador de la provincia de Buenos Aires y perdedor en las elecciones presidenciales frente a De la Rúa.

res de poder, como reproducción de los procesos de acumulación de poder. Acumulación partidaria, por cierto, pero también de grupos, fracciones e individuos dentro de los partidos. Esto significó una “corrupción” de la política, en el sentido de alteración o perversión. Al parecer, como dice Pucciarelli, eliminada la lucha contra la amenaza del golpe militar y también contra la militarización del régimen político que caracterizó periodos anteriores, la democracia perdura, se fortalece y se legitima, de un modo paradójico: vaciándose de contenido y desnaturalizando sus objetivos. Se reduce en forma alarmante el papel de la práctica política concebida como instrumento de resolución de problemas sociales y se la reemplaza por un sofisticado esquema de representación escénica y de delegación electoral que pone en profunda crisis las formas tradicionales de construir ámbitos de poder y medios de representación político-electoral (Pucciarelli, 2001).

El comportamiento de los políticos fue percibido como orientado hacia sí mismo y no a la atención de las cuestiones, cada vez mayores en cantidad y dramatismo, de los diferentes grupos de la sociedad. De allí que el peso creciente tanto de la corrupción, en la relación entre política e intereses económicos, como del clientelismo, en los vínculos con los grupos más desfavorecidos, fueron las dos caras más visibles de la actividad política.

Las primeras reacciones provinieron de algunos excluidos de lo que se llamó la “fiesta menemista”. Durante los primeros años noventa, el fin de la inflación mejoró la situación de los sectores de menores recursos y generó, en los sectores populares, una percepción positiva sobre los cambios que se producían. Cuando ese efecto se fue diluyendo comenzaron las protestas. Por un lado, protestas urbanas de algunos sectores particularmente afectados, como los jubilados o los trabajadores de los servicios sociales (educación y salud fundamentalmente). Los primeros demandando el incremento de sus ínfimas asignaciones y los segundos la defensa de los servicios públicos, de sus empleos y remuneraciones. Por otro lado, se presentaron nuevas protestas, de carácter local-regional, que movilizaron a poblaciones enteras. Estos conflictos fueron motorizados por grupos heterogéneos formados en gran medida por desocupados, y secundados por comerciantes, estudiantes, empleados públicos y familias. Estos grupos se organizaron en forma autónoma y tomaron decisiones de manera colectiva. Todo ello bajo las luces de la prensa nacional que, por medio de la televisión, los puso al alcance de todo el país.

La primera protesta ocurrió en 1991 con motivo del cierre de una empresa minera estatal¹⁴ en la ciudad de Sierra Grande, en la patagónica provincia

¹⁴ La mina está hoy dedicada a un emprendimiento de turismo aventura por iniciativa de los anteriores mineros.

de Río Negro. Este pueblo inició la costumbre de cortar las rutas para que sus voces fueran oídas. Durante 1993 en las ciudades capitales de varias de las provincias más pobres (La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy, por ejemplo) se produjeron protestas de empleados públicos y comerciantes, frente a la aplicación, o la amenaza, de ajuste gubernamental. Estallaron fuertes conflictos en las regiones patagónica y noroeste por parte de quienes perdieron sus trabajos por la privatización de las empresas de petróleo,¹⁵ gas y carbón, y por la incapacidad de las economías y gobiernos provinciales y locales para hacerse cargo de ellos. Se fue consolidando la protesta "piquetera"¹⁶ que con los años adquirió presencia y organización a nivel nacional, vinculándose tanto a una central sindical no oficial como a movimientos políticos de izquierda. Desde el año 2000 tiene una presencia importante en las manifestaciones de protesta, llegando al centro de la ciudad de Buenos Aires junto con otros grupos sociales.

Cuando el 19 de diciembre por la noche, ante la existencia de algunos saqueos a supermercados¹⁷ el presidente De la Rúa decreta el estado de sitio, con el propósito de evitar toda protesta en un momento en el que al parecer estaba negociando con el PJ su continuidad en el cargo, se produce una sorpresiva reacción de la clase media de la ciudad de Buenos Aires que, desoyendo esa declaración, sale a la calle hacia la medianoche.

Las movilizaciones que se dan desde el 19 de diciembre muestran dos novedades: la integración en las calles de las clases medias urbanas y los "piqueteros", y la repulsa clara a los políticos. La consigna general dice: "que se vayan todos". Que se vayan los miembros del Ejecutivo, los diputados y senadores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esa repulsa a los que están, más allá de que puede dejar fuera a una muy pequeña parte de los políticos, fundamentalmente de partidos diferentes de los tres principales, no se complementa con una postulación alternativa. La sociedad no tiene alternativa política. De manera particular, el fracaso del FREPASO la dejó, no solamente sin alternativa partidaria, sino sin la perspectiva de un proyecto diferente. Es por eso que un llamado a elecciones,

¹⁵ Esa empresa entre 1991 y 1996 pasó de 50 000 a 7 000 empleados, habiendo tenido, además, una ganancia de 5 000 millones de pesos (*Clarín*, 16 de mayo de 1997), que en ese entonces equivalía a otros tantos dólares.

¹⁶ Derivado de "piquete de huelga" [grupo de personas que vigilan el cumplimiento de una huelga (nota editorial de la revista)], pero aplicado a desocupados que cortan las rutas y las calles de las ciudades para hacer oír sus protestas y reclamos.

¹⁷ Hay información periodística suficiente para conocer que en gran medida esos saqueos, que se produjeron en los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, contaron con la pasividad policial y en algunos casos, con cierta organización desde fuera de los barrios.

que debería dar legitimidad al gobierno, solamente parece ser deseado por algunos miembros del PJ que suponen que gracias a los aparatos partidarios podrían sumar la mayor cantidad de votos y ganar la elección. Sin embargo, su legitimidad sería muy débil, insuficiente para asumir políticas que deberían enfrentar intereses sociales y económicos muy fuertes, pese a que esos políticos tienden a representar al “establishment”. La sociedad, por su lado, sabiendo de la necesidad de elecciones, no está convencida, dado que sabe también que muy probablemente significarían el triunfo de alguien que está incluido en ese “todos” de la consigna.

La crisis de “lo público”

La sociedad argentina muestra una importante crisis sociocultural. De manera simplificada puede decirse que se caracteriza por una gran debilidad institucional: debilidad para producir acuerdos, normas colectivas que organicen el comportamiento y, particularmente, que permitan la formación de organizaciones que desarrollen intereses generales. Se trata, en otra dimensión, de una fuerte debilidad de lo público. En primer lugar como valor, el predominio de los intereses generales frente a los intereses particulares, el predominio de lo que es de todos frente a lo que es de uno (pocos o no, pero algunos, una parte). En suma, la dificultad de subordinar los intereses particulares, las posiciones parciales a los intereses generales, a los bienes y necesidades comunes. En otra perspectiva se trata de la radical debilidad del Estado, entendido como el responsable frente a la sociedad civil de gestionar lo que es común, lo que es de todos, los intereses generales, “lo público”.

Esa debilidad de las normas se correlaciona con el peso del poder y la efectividad de logro (como éxito). Frente al poder no hay normas, así como el logro final, el éxito, legitima los procedimientos aplicados.

Este hecho puede ser analizado en dos perspectivas. Una de mediano plazo, en la que se haría hincapié, otra vez, en la herencia de la dictadura y en su consolidación en los años noventa. Otra de largo plazo, que nos remontaría hasta los momentos iniciales de la sociedad argentina.

Desde la sociedad de contrabandistas que comenzó siendo la Buenos Aires colonial,¹⁸ pasando por los intentos —exitosos— de excluir a la población que no se consideraba favorable (como los indígenas para Domingo Sarmiento) o bien la organización nacional políticamente excluyente de quie-

¹⁸ Es muy ilustrativo leer el texto que Carlos Fuentes le dedica a este tema en su novela *La campaña* (1990).

nes hacían la riqueza desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década del siglo siguiente, la sociedad argentina se organizó con lo que pudiéramos considerar un importante nivel de "ficción". La duplicación de los órdenes jurídicos durante la dictadura, con la formación de un orden subterráneo, pero no menos real y formal (con órdenes escritas), para la represión y eliminación de quienes se consideraban excluidos del modelo de país que se imponía con sangre, es un dramático ejemplo de esa ficción.

Fuera de la dictadura fue quizás durante el menemismo cuando la debilidad de las instituciones y su subordinación al poder alcanzaron su mayor grado: la sanción de la privatización del gas natural con un quórum logrado por la presencia de falsos diputados, que luego de la votación fueron descubiertos por el periodismo sin que esto llevara a la anulación de la ley; la desaparición de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia supuestamente promovida por el Ministerio de Economía; la obscena ostentación de riquezas por parte de los políticos; y muchos más hechos que no provocaron ninguna sanción institucional (sea por parte de la justicia o de los organismos de control) y que, sobre todo, fueron exculpados con los triunfos electorales.

Esos hechos hacen referencia a la existencia de proyectos particulares que se imponen frente a los intereses generales. Más aún, en otra perspectiva, muestran la dificultad de desarrollar proyectos colectivos (instituciones) que sumen los esfuerzos en pos de intereses generales. Esto tal vez se viene arrastrando desde hace mucho tiempo: cuando los contrabandistas devinieron élites sociales, políticas y económicas. Empresarios que no asumen riesgos y que basan sus riquezas no en la innovación sino en comportamientos rentísticos sin defender los ámbitos colectivos de su acumulación, estando prestos a someterse a las presiones externas siempre que se les garantice mantener y aumentar sus ganancias; sindicalistas que canalizan y controlan las protestas para utilizarlas como un capital políticamente (y económicamente) rentable; políticos, como hemos dicho, que hacen de la acumulación de poder su norte. Pero en definitiva, una sociedad que no logró unir en fuerte identidad a los grupos heterogéneos que vinieron desde otros continentes, desde el interior y desde los países limítrofes y que ahora sufren estas frustraciones.

Esa sociedad, y en especial sus sectores medios, se encandiló con el brillo de los bienes importados en las góndolas de los supermercados, con la posibilidad de viajar a Miami una o dos veces por año y prefirió no ver que eso mismo estaba socavando el piso en el que se asentaba. Qué importa que se destruya la educación pública si podremos enviar a nuestros hijos a escuelas privadas y universidades extranjeras, qué importa que perdamos el control del petróleo si se gestionaba por ineficientes funcionarios estatales, qué im-

porta que no se cumplan las normas si logramos los bienes que queremos. Más aún, garanticemos el triunfo de quienes aseguran mantener esas condiciones, aunque ellos no actúen “prolijamente”.¹⁹

Podemos suponer además que gracias otra vez al peso prolongado de la dictadura,²⁰ una parte importante de la sociedad, y especialmente de sus dirigentes políticos, económicos y sociales, creía que el deterioro argentino se debía al arrastre de un modelo estatista ineficiente y populista que era preciso modificar sin que fuese posible elegir las condiciones en las que se diera ese cambio. Lo importante, una vez más, era solamente el logro, no cómo se llegaba a ello. De allí que fuera preciso aceptar la corrupción, la superficialidad, el debilitamiento de las normas sociales, como también la pobreza y la exclusión, que alguna vez se recuperarían gracias a la “derrama” tantas veces anunciada y nunca producida.

Lo que ocurrió sería, para parafrasear a Barbara Tuchman, una “marcha de la locura” colectiva: la sociedad siguió hacia el vacío cuando algunas voces, débiles, pero que podían oírse, lo anunciaban.

Esa debilidad de lo público es dramáticamente evidente en la producción de las ciudades argentinas y especialmente en su ciudad principal, Buenos Aires. La ausencia, no solamente de un proyecto público de ciudad que oriente a los actores privados, sino de normas que efectivamente impidan que los intereses privados subordinen a los públicos o, como sucedió más de una vez, claro que en los años noventa más que otras veces, la sanción de excepciones a las pobres normas existentes para que sea posible realizar negocios que no tienen en cuenta las condiciones del funcionamiento urbano (densidades sin infraestructuras adecuadas, apropiación privada de rentas basadas en inversiones estatales y de otros actores privados, etc.). Es un buen ejemplo, además, mencionar que las privatizaciones de las empresas estatales de servicios de infraestructura transfirieron, junto con la producción del servicio, un conjunto de decisiones de naturaleza pública que se refieren a definiciones de política y planificación. Quedó en manos de las empresas, por ejemplo, decidir si la inversión en tratamiento de las aguas negras se realiza al comienzo o no del periodo de la concesión, cuando las necesidades ambientales indican que debe hacerse cuanto antes (Pírez, Gitelman y Bonnafé, 1999).

¹⁹ Es muy interesante la generalización del término “desprolijo” para referir a comportamientos inmorales o ilegales, asociando la adecuación a las normas con un rasgo de carácter, el de ser cuidadoso o esmerado en los comportamientos. De esta forma queda vaciado el contenido valorativo ético y jurídico.

²⁰ No en vano durante esos años se machacó que “achicar al Estado es agrandar la nación”.

Hemos presentado algunos elementos que consideramos importante tener en cuenta para entender qué está pasando en la sociedad argentina. Sin lugar a dudas, es un recorte subjetivo, no necesariamente el mejor. Si logran iluminar algunos procesos que, de una u otra forma, pueden estar, en combinaciones diversas, en más de una de nuestras sociedades, habrán cumplido su objetivo.

Recibido: enero, 2002

Revisado: abril, 2002

Correspondencia: Casilla 153, 1431 Abasto/Buenos Aires/Argentina/correo electrónico: ptpirez@mail.retina.ar

Bibliografía

- Abeles, Martín (2000), "Evolución de precios y tarifas de los servicios públicos privatizados", en varios autores, *Privatizaciones e impacto en los sectores populares*, Buenos Aires, Editorial de Belgrado.
- Azpiazu, Daniel (1997), "El nuevo perfil de la elite empresaria. Concentración del poder económico y beneficios extraordinarios", *Realidad Económica*, núm. 145, enero-febrero.
- Azpiazu, D. y Hugo Nochteff (1994), *El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía Política*, Buenos Aires, FLACSO-Grupo Editorial Norma.
- Basualdo, Eduardo M. (2001), *Modelo de acumulación y sistema político en la Argentina. Notas sobre el transformismo argentino durante la valorización financiera*, Buenos Aires, FLACSO-Universidad Nacional de Quilmes-IDEF.
- Botana, N. (1985), *El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916*, Buenos Aires, Hyspamérica.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) (2000), *Encuesta permanente de hogares*, Buenos Aires, serie octubre.
- (1997), *Informe de prensa*, Buenos Aires.
- Nun, José (2001), "El enigma argentino", *Punto de Vista*, núm. 71, diciembre.
- Pírez, Pedro (1997), "La situación social de la ciudad metropolitana de Buenos Aires en el contexto nacional", *Realidad Económica*, núm. 150, agosto-septiembre.
- (1991), *Municipio, necesidades sociales y política local*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano/IIED-AL.
- Pírez, P., N. Gitelman y J. Bonnafé (1999), "Consecuencias políticas de la privatización de los servicios urbanos en la ciudad de Buenos Aires", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 61, núm. 4, octubre-diciembre.
- Poniachik, Jaime (2001), "Cómo empezó la deuda externa", *La Nación*, 6 de mayo.

- Pucciarelli, A. (2001), "El régimen político argentino a fines de la década ¿democracia impotente o cómplice?", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LXIII, núm. 3, julio-septiembre.
- Secretaría de Programación Económica (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) (1997), *Informe Económico Año 1996*, Buenos Aires, abril, año 6, núm. 20.
- Vilas, Carlos M. (2001), "Como con bronca y junando... Las elecciones del 14 de octubre 2001", *Realidad Económica*, núm. 183, octubre-noviembre.
- Vitelli, Guillermo (2002), "Crisis ¿qué soluciones? Diagnóstico y prescripción", *Realidad Económica*, núm. 185, enero-febrero.

